

EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA

ESPAÑA



Vista de la calle Jaume I de Barcelona. / MASSIMILIANO MINOCRI

P. RÍOS / C. S. BAQUERO, Barcelona

La actividad de la Generalitat de Cataluña está bajo mínimos después de la intervención de las cuentas catalanas por parte del Ministerio de Hacienda, en septiembre pasado, y el cese del Govern y la disolución del Parlament tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en octubre. Con ambas medidas el Gobierno de Mariano Rajoy intentaba poner freno a la deriva independentista del Ejecutivo catalán y a la escalada de tensión social que amenazaba la economía, pero no ha sido una solución inocua. La tensión política extrema que se vivió en otoño se ha reducido, como mínimo en las calles, y eso lo agradecen en sectores como la hostelería, que esperan recuperar los flujos turísticos habituales. Sin embargo, el día a día se gestiona de forma más engorrosa porque todo tiene que recibir el visto bueno de los ministerios implicados y del Consejo de Ministros. Pero lo que más preocupa es la parálisis en el diseño de planes y estrategias de futuro.

Sectores tan diversos como el económico, el educativo, el vecinal, el sindical o las entidades sociales muestran su inquietud ante esta pérdida de impulso. Cada uno aporta su propia visión sobre la situación en Cataluña pero es unánime el clamor para que se forme Govern lo más pronto posible, vuelva la actividad legislativa al Parlament y se intente una vía negociada que solucione el desafío secesionista.

“Hay que evitar incertidumbres que frenen el crecimiento. Es necesario recuperar la estabilidad institucional y que, desde la lealtad y el respeto a la ley, se pueda gobernar Cataluña”, piden desde Fomento del Trabajo. La patronal catalana, presidida por Joaquín Gay de Montellà, valora algunos indicadores como la evolución del empleo o los buenos re-

Los representantes de diversas entidades de la sociedad civil piden que no se dilate la investidura por la parálisis en el diseño de estrategias

Inquietud por la falta de Govern

sultados del Puerto de Barcelona —pese a cierto bajón en la economía en el último trimestre del año pasado— y cree que, sobre esta base y con un Govern estable, hay expectativas de crecimiento.

Mucho más escépticos son los miembros de Empresaris de Catalunya, asociación que agrupa a colectivos económicos contrarios a la independencia. “Es evidente que el camino tomado por el separatismo es el de priorizar el conflicto e imponer sus tesis a gobernar lo cual perjudica a todos los catalanes. La única salida es el mantenimiento del artículo 155 y crear así un marco de normalidad”, dice Josep Bou, presidente de la asociación.

Lo que dice Empresaris de Catalunya va en línea con la actuación de empresas como Freixenet, que han decidido mantener su sede en esa comunidad autónoma porque entienden que la aplicación del 155 ha aportado la tranquilidad necesaria. El consejo de la empresa decidió quedarse en Cataluña por la “afirmación del orden constitucional y estatutario” a partir de la aplicación del artículo 155.

Para Javier Pacheco, secretario general de CC OO de Cataluña, la necesidad de tener un Eje-

La patronal llama a no frenar el crecimiento con más incertidumbre

“Sin Gobierno no vamos a ninguna parte”, dice el líder vecinal Jordi Giró

cutivo es urgente porque es la principal herramienta “para construir los marcos de concordia que ahora se necesitan en Cataluña”. El líder sindical recuerda que la descentralización es la fórmula para poder responder a las necesidades de la ciudadanía y, por ello, tener un Gobierno propio es “la mejor manera” de atender una situación social que sigue sin levantar completamente la cabeza tras la crisis económica.

“El parón en la Generalitat ha puesto en grave riesgo muchos servicios y programas sociales. Solo se puede resolver la situación desde la negociación y el diá-

logo”, añade Francina Alsina, presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, la plataforma que aglutina a más de 3.000 entidades sociales en Cataluña. Sin embargo, continúa Alsina, la simple restitución del autogobierno no es suficiente para volver a la normalidad. “Insistimos en que los conflictos políticos solo se pueden resolver políticamente, apostando por la negociación y el diálogo. Esta visión también la comparte Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Cataluña. “Es un enorme error traspasar a la justicia lo que es un problema político”, asegura.

Desde el potente movimiento vecinal en Cataluña también ven la falta de un Govern como una de las causas que impiden luchar contra los problemas que afectan a los catalanes más necesitados. Para Jordi Giró, presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (CONFAVC), “existe un divorcio entre la realidad política y social”. Según el líder vecinal, es fundamental solucionar esta división o se errará en cualquier intento de construir una sociedad más igualitaria. “No es bueno para la ciudadanía, sobre todo para los que más lo necesitan. Eso implica renuncias de unos y otros para salir adelante”, agrega.

Sin un Gobierno y sin un legislativo en plena forma son muchas las cuestiones que están en el congelador. Belén Tascón, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (FAPAC) pone como ejemplo el decreto de educación inclusiva, aprobado el pasado octubre. “Queremos un Govern que pueda elaborar unos Presupuestos que permitan mejorar las políticas educativas. No podemos estar de acuerdo con estrategias que lo único que pretenden es dilatar en el tiempo la formación del Govern”, agrega.

El Tribunal de Cuentas audita la red de ‘embajadas’ catalanas

AGENCIAS, Madrid

El Tribunal de Cuentas ya ha puesto en marcha la investigación de los gastos de la red diplomática de la Generalitat de Cataluña, una de las medidas incluidas dentro de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y aprobada por la comisión mixta del Congreso y el Senado el pasado diciembre. El ente fiscalizador auditará el gasto de los recursos asignados a la política de acción exterior catalana entre los ejercicios 2011 y 2017.

El tribunal procederá ahora a solicitar la información de unas 29 entidades, incluyendo consorcios y agencias autonómicas, que tenían acción en el extranjero. La lista incluye, por ejemplo, al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. También están el Instituto Catalán Internacional por la Paz; la Promotora de Exportaciones Agroalimentarias; la Agencia Catalana de Turismo y la Fundación Casa América Cataluña, entre otros.

El detalle de las cuentas tiene que estar en el Tribunal de Cuentas antes del próximo 15 de febrero. El Diplocat ya había sido liquidado en el marco de la aplicación del artículo 155, pero la mayoría de las entidades sigue con sus labores de cooperación internacional y la promoción de la economía y la cultura catalana en el exterior.

Política diplomática

Entre la información que el tribunal fiscalizador solicita figura toda la normativa en materia de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, la relativa a las comunidades catalanas en el exterior y la de las unidades de representación institucional en el extranjero, así como el organigrama de la comunidad autónoma para su política diplomática.

También pide la relación y copia de los planes anuales y plurianuales de acción exterior y cooperación al desarrollo, así como de las actuaciones llevadas a cabo en ese ámbito: programas, asistencia técnica, acuerdos de colaboración, participación en organizaciones y redes internacionales, conferencias, foros, seminarios, estudios, publicaciones o programas formativos. Quiere el Tribunal de Cuentas una relación y una copia del acuerdo de creación de las unidades de representación institucional en el exterior, con el personal destinado, los contratos de arrendamiento de sus sedes y las liquidaciones mensuales de gastos presentadas por sus responsables.